

Diversos aspectos procesales relacionados con la reclamación de cantidad en el marco del transporte marítimo de mercancías  
*Several procedural aspects related to claims for payment within the carriage of goods by sea scope* 1

Las medidas cautelares en el proceso civil como medio para asegurar el buen fin de una reclamación dineraria  
*Interim measures in civil proceedings as a mean to ensure the satisfactory resolution of a claim for payment* 3

## DIVERSOS ASPECTOS PROCESALES RELACIONADOS CON LA RECLAMACION DE CANTIDAD EN EL MARCO DEL TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS

Jordi Rivera

### Introducción

En el presente artículo pasamos a detallar por un parte ciertos aspectos básicos que deben tenerse claros ante la necesidad de formular una reclamación de cantidad que tenga como origen el transporte por mar de mercancías y, por otra parte, ciertas peculiaridades que pueden encontrarse en estos procedimientos y que resulta conveniente conocer.

### Competencia objetiva y territorial

Partiendo de la atribución de jurisdicción y competencia a nuestros órganos jurisdiccionales y atendiendo a las normas sobre jurisdicción por razón del objeto reguladas en los artículos 9.2 y 10 de la LOPJ, podemos afirmar que serán los órganos jurisdiccionales del orden civil los encargados de conocer de las reclamaciones de cantidad derivadas de este tipo de contratos y, dentro de éstos, en atención a las normas de competencia objetiva por razón de la cuantía, serán competentes los Juzgados de Primera Instancia.

**"...el porteador, como persona que emite el conocimiento de embarque, será normalmente el legitimado pasivamente en un proceso civil de estas características..."**

En cuanto a la competencia territorial, debemos prestar atención a lo previsto en relación a competencia territorial en el artículo 50.3 de la LEC en cuanto a demandar a los empresarios y profesionales por cuestiones derivadas de su actividad empresarial o profesional, añadiendo la posibilidad de ser demandados en el lugar en el que los mismos desarrollen dicha actividad. Si dichos empresarios o profesionales cuentan con más de un establecimiento en diferentes lugares a su cargo, el actor podrá elegir presentar la demanda ante los tribunales de cualquiera de ellos.

### Legitimación activa y pasiva

Partiendo del concepto de legitimación, tanto activa como pasiva, previsto en la LEC, nos centramos en la determinación de dicha legitimación, en concreto, en los procesos derivados de la responsabilidad que trae causa de un contrato de transporte marítimo bajo conocimiento de embarque (documento propio del transporte marítimo que se utiliza en el marco de un contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular y cuya finalidad es proteger al cargador y al consignatario de la carga frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto al comportamiento de la otra).

Legitimado activamente para el ejercicio de la acción contra el porteador por el incumplimiento de dicho contrato, fundamentalmente, por las pérdidas o averías de las mercancías, estará la persona que tenga derecho a que el porteador le entregue las mercancías, así como aquel que se subrogue en tal derecho. De esta forma, la legitimación activa en esta clase de reclamaciones recae sobre el tenedor legítimo del conocimiento de embarque, sobre el destinatario de las mercancías, estando o no en posesión del conocimiento de embarque, siendo o no, por tanto, cargador. El cargador, parte en el contrato de transporte marítimo ostentará, en determinados supuestos, la legitimación activa y, por último, el asegurador, en el caso de subrogación en la posición del asegurado, cuando exista, obviamente, contrato de seguro sobre las mercancías transportadas.

## SEVERAL PROCEDURAL ASPECTS RELATED TO CLAIMS FOR PAYMENT WITHIN THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA SCOPE

Jordi Rivera

### Introduction

In this article we will put forward, on the one hand, certain basic aspects that we should have clear if we are obliged to file a claim for payment derived from the carriage of goods by sea and, on the other hand, certain peculiarities that we may find in these proceedings and which we should know.

### Objective and territorial competence

Assuming the assignment of jurisdiction and competence to our courts and tribunals and considering the rules on jurisdiction due to the object regulated in articles 9.2 and 10 of the LOPJ (the Judiciary Act), we can assert that the civil courts will be the ones to deal with claims for payment derived from this type of contracts and, particularly, considering the rules of objective jurisdiction due to the amount, the Courts of First Instance will be the competent courts.

**"...the carrier, as the person who issues the bill of lading, will usually hold the defendant's standing in a civil proceeding of these characteristics ..."**

Regarding territorial competence, we must take into account in article 50.3 of the LEC (Civil Procedural Act) when suing businessmen and professionals for questions derived from their business or professional activity, with the possibility to be sued in the place where they may develop such activity. If such businessmen or professionals have more than one establishment in different places, the plaintiff may bring the lawsuit before the courts of any of them.

### Claimant's and defendant's standing

Starting from the legal standing concept, both the claimant's standing and the defendant's standing provided in the LEC, we will focus on the determination of such legal standing, particularly in proceedings derived from the responsibility arisen from a contract of carriage by sea under a bill of lading (document of carriage by sea used in a contract of carriage of goods in a liner vessel and whose purpose is to protect the loader and the addressee of the cargo to the ship-owner and give confidence to each party with respect the other's behaviour).

The person entitled to receive the goods from the loader and any such person that may be subrogated in such right will hold the claimant's standing to bring the action against the loader for breach of such contract, fundamentally for losses or faults in the goods. This way, the claimant's standing in this class of proceedings falls on the lawful holder of the bill of lading, the addressee of the goods, either in possession or not of the bill of lading, thus either being or not the loader. The loader, party to the contract of carriage by sea, will hold in certain cases the claimant's standing and finally the insurer, in the event of subrogation in the insured party standing, provided that there is a contract of insurance on the goods shipped.

En relación a la legitimación pasiva, el ejercicio de la acción de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de un contrato de transporte marítimo pretendiendo la declaración de responsabilidad por pérdidas, averías o retraso en la entrega de las mercancías o, en definitiva, por los daños y perjuicios que derivasen de tal transporte, puede ir dirigida evidentemente frente al porteador, que aparece en la mayoría de los casos como principal responsable del transporte, siendo también posible demandar a personas distintas de aquel que llevó a cabo el transporte marítimo.

Así, no siempre ostentará la legitimación pasiva el porteador marítimo sino que ésta puede también recaer, por ejemplo, sobre el capitán del buque, empresas de carga y descarga e, igualmente, podrá estar pasivamente legitimado el asegurador marítimo, en su caso.

No obstante, el porteador, como persona que emite el conocimiento de embarque, independientemente de que en él coincidan también la condición de propietario, naviero, armador o fletador, será normalmente el legitimado pasivamente en un proceso civil de estas características, por cuanto es quien emitió el conocimiento de embarque comprometiéndose al transporte de las mercancías y a su posterior entrega al destinatario de las mismas en idéntico estado en que las recibió.

### El conocimiento de embarque como título ejecutivo

El conocimiento de embarque se emite a resultas de la contratación de un transporte marítimo. Su función, en principio, consistía sencillamente en acreditar que se había recibido el cargamento a bordo del buque para su transporte. Posteriormente, este recibo, adquiere el carácter de título valor y, como tal, atribuye a su legítimo tenedor un derecho de crédito sobre las mercancías en el puerto de destino.

Este documento asume la categoría de título de tradición, representativo de las mercancías transportadas e incorporando el derecho a su posesión inmediata a quien lo posea pudiendo, por tanto, transmitir las mediante la entrega del conocimiento de embarque.

El conocimiento de embarque se trata pues de un documento con los siguientes cometidos: En primer lugar, es el contrato en el que las partes expresan las condiciones del contrato de transporte, siendo, por tanto, un documento contractual. Por otro lado, tiene valor probatorio pues acredita el embarque, condiciones y cantidad de la carga recibida a bordo. Finalmente, legitima a su tenedor para reclamar las mercancías en el puerto de destino, pudiendo asimismo disponer de ellas a lo largo del viaje. El conocimiento de embarque, por tanto, es un título valor en cuanto título de crédito frente al porteador y título de tradición.

**"...podemos afirmar que el conocimiento de embarque aquí mencionado es un título ejecutivo extrajudicial..."**

Tras la lectura detenida de los artículos 246 y siguientes de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima (En especial el artículo 253) en relación con el artículo 517.2.9 LEC, podemos afirmar que el conocimiento de embarque aquí mencionado es un título ejecutivo extrajudicial, con lo que el titular del mismo, si quiere que se dé efectivo cumplimiento a lo que dicho conocimiento de embarque contiene cuenta con dos opciones: O bien reclamar las cantidades debidas a través de un proceso de ejecución de títulos no judiciales, o bien acudir a un proceso declarativo, obteniendo así una sentencia firme de condena tras el cual se podrá acudir a un proceso de ejecución ordinario.

Contamos también, evidentemente, con la posibilidad de ejercitar la acción de reclamación empleando el proceso monitorio siempre que proceda según lo estipulado en el artículo 812 y siguientes de la LEC.

En aplicación de la teoría general sobre ejecución de títulos no judiciales resultan objetivamente competentes para la ejecución del conocimiento de embarque, los Juzgados de Primera Instancia. Se determina la competencia territorial permitiendo al ejecutante, que, sobre la base de la deuda acreditada mediante el conocimiento de embarque, reclame el pago de los fletes debidos, ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado (cargador o destinatario de las mercancías), del lugar que conste en el conocimiento de embarque como puerto de destino o de entrega de las mercancías, o en cualquier otro lugar donde existan bienes embargables del cargador.

En cuando a las partes en este proceso de ejecución de títulos no judiciales derivado del conocimiento de embarque, serán aquellos que consten en dicho documento probatorio del transporte marítimo (Normalmente, el porteador marítimo, por un lado, y el cargador o destinatario de las mercancías, por otro). Dependiendo de quién y frente a quien se reclamen las cantidades debidas pasarán a ser el ejecutante o ejecutado, pues ambos pueden ocupar la posición activa o pasiva. El porteador, por su parte, estará legitimado activamente para solicitar el despacho de la ejecución por los fletes debidos por el cargador acreditado en el conocimiento de embarque, estando este, por tanto, en la posición pasiva. Por otro lado, el cargador podrá reclamar al porteador el equivalente pecuniario al valor de las mercancías descritas en el conocimiento de embarque, siendo en este caso el cargador el ejecutante.

Como podemos comprobar, el procedimiento de reclamación de cantidades dimanante de un contrato de transporte marítimo de mercancías, a pesar de ceñirse en determinados aspectos a lo que comúnmente podemos encontrar en un proceso de reclamación dineraria, si cuenta con ciertas especialidades y/o particularidades cuyo conocimiento resulta conveniente de cara a maximizar las posibilidades de que nuestra reclamación prospere.

*With respect to the defendant's standing, the responsibility action for breach of the obligations in a contract of carriage by sea seeking the declaration of liability for losses, faults or delay in the delivery of the goods or for any damages arisen from such carriage may be obviously filed against the loader, which is mainly the principal liable party for the carriage. Any persons other than the one that carried out the carriage may be also sued.*

*Consequently, not always the sea carrier will hold the defendant's standing, but this legal standing may also fall on the vessel's captain, for example, the loading and unloading companies and also the sea insurer, if any.*

*However, the carrier, as the person who issues the bill of lading, regardless of being also the ship-owner or charterer, will usually hold the defendant's standing in a civil proceeding of this characteristics, since the carrier is the one that issued the bill of lading undertaking the carriage of goods and their subsequent delivery to the addressee in the same conditions as it received them.*

### The bill of lading as an enforcement order

*The bill of lading is issued as a result of the contracting of carriage by sea. Its initial purpose merely consisted of certifying that the cargo on board of the vessel for its carriage had been received. Later on, such receipt acquired the nature of security and, as such, it assigns its lawful holder a credit right on the goods in the destination port.*

*This document assumes the category of title of delivery representative of the goods carried and incorporating the right to its immediate possession to the person that may hold it, who may therefore transfer them by delivering the bill of lading.*

*The bill of lading is thus a document aimed at: firstly, it is the contract in which the parties express the conditions of the contract of carriage; it is therefore a contractual document. Furthermore, it has evidentiary value*

**"...we can assert that the bill of lading is an out-of-court enforcement order..."**

*since it certifies the loading, conditions and amount of the cargo received on board. Finally, it lawfully entitles its holder to claim the goods in the destination port and also to use them throughout the journey. The bill of lading is therefore a security as it is a credit title to the carrier and title of delivery.*

*After thoroughly reading articles 246 et seq. of Act 14/2014 of Carriage by Sea (particularly article 253) in relation to article 517.2.9 LEC, we can assert that the bill of lading is an out-of-court enforcement order, so that if the holder wants to give effective fulfilment to that contained in the bill of lading, it has two options: claim the amount owed under an enforcement proceeding of out-of-court titles or a declaratory action, thus obtaining a final judgment of sentence, after which, the holder may turn to an ordinary enforcement proceeding.*

*Evidently, we also have the possibility to file the claim by using the small claims procedure, provided it is appropriate pursuant to article 812 et seq. of the LEC.*

*By application of the general theory on enforcement of out-of-court titles, the Courts of First Instance are objectively competent to enforce the bill of lading. The territorial jurisdiction is determined by allowing the enforcing party to, based on the debt certified under the bill of lading, claim payment of the freights owed before the Court of First Instance of the defendant's domicile (loader or addressee of the goods), of the place stated in the bill of lading as the destination or delivery port of the goods or at any other place where there are assets of the loader capable of being attached.*

*Regarding the parties to this enforcement proceeding of out-of-court titles derived from the bill of lading, they will be those contained in such evidentiary document of carriage by sea (normally, the sea carrier, on the one side, and the loader or addressee of the goods, on the other). Depending on and to whom are the amounts owed claimed, they will be the enforcing or the enforced party, since they both can hold the claimant's or defendant's standing. The carrier will be recognized as lawful claimant to request dispatch of the enforcement for the freights owed by the loader certified in the bill of lading, the latter thus holding the defendant's standing. On the other hand, the loader may claim from the carrier the pecuniary amount equivalent to the value of the goods described in the bill of lading, the loader being in this case the enforcing party.*

*As we can see, claims for payment arisen from a contract of carriage of goods by sea, despite being adjusted to certain aspects which we may usually find in claims for payment, have certain specialities and/or particularities whose knowledge is appropriate to maximize the possibilities for our claim to be successful.*

## LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CIVIL COMO MEDIO PARA ASEGURAR EL BUEN FIN DE UNA RECLAMACION DINERARIA

Jordi Rivera

### Introducción

Se entienden como medidas cautelares aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora en un proceso judicial no vea burlado su derecho, siendo pues este mecanismo un fiel reflejo del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 de la Constitución española de 1.978, y una útil herramienta a emplear siempre que sea posible y las circunstancias del proceso en el que nos encontremos lo hagan aconsejable.

### Rasgos básicos de la medida cautelar

Debemos destacar, por su especial relevancia y utilidad en diversidad de procedimientos las medidas cautelares como herramienta para asegurar la ejecución de una posterior sentencia, es decir, su eficacia, siendo un claro exponente las solicitadas en el marco de un procedimiento de reclamación de cantidad en las que se interesa el embargo preventivo de bienes titularidad del demandado.

En el contexto actual, en el que se ha experimentado un claro aumento en la morosidad en determinados ámbitos, no siempre es suficiente con contar con aquella documentación que acredite nuestro derecho al cobro de una determinada deuda, máxime cuando somos conocedores de que la persona física o jurídica que va a ser objeto de la reclamación no cuenta con una situación económica saneada y que podemos encontrarnos con una resolución favorable a nuestros intereses pero de ejecución imposible por haber devenido insolvente el deudor durante el transcurso del proceso.

**“...se va a conceder no porque el que la solicita ostente un derecho indiscutido sobre el objeto del proceso, sino porque de forma indiciaria parezca que la razón puede llegar a asistirle...”**

En estos supuestos, y aunque la solicitud de las medidas cautelares implique la

correspondiente apertura de la pieza separada en la que se tratará respecto de la adopción de las mismas con el consiguiente riesgo de que el Juez pueda no acordarlas, consideramos que es un riesgo que vale la pena correr siempre y cuando cumplamos con los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 728 establece, esto es, la apariencia de buen derecho y el peligro por mora procesal además de prestar caución.

En cuanto al primer requisito, es decir la apariencia de buen derecho, y poniendo como ejemplo un proceso en el que reclamemos una suma derivada de una relación comercial mantenida con el ahora deudor, resultará más que suficiente para acreditarla el poder aportar aquellos documentos que acrediten de forma indiciaria que ha existido la mencionada relación y que de la misma ha podido derivarse la deuda, como por ejemplo facturas o albaranes de entrega. Debemos tener claro que la medida se va a conceder no porque el que la solicita ostente un derecho indiscutido sobre el objeto del proceso, sino porque de forma indiciaria parezca que la razón puede llegar a asistirle en el proceso principal.

El segundo requisito es el que trata sobre el peligro por la mora procesal, es decir y como comentábamos con anterioridad, el riesgo que corre el solicitante de la medida de acabar obteniendo una Sentencia que le dé la razón pero que no pueda ser ejecutada a resultas de la insolvencia sobrevenida del obligado al pago.

En cuanto a la caución que el solicitante deberá prestar, se configura como una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absoluta que haga frente a los daños y perjuicios que la adopción de la medida le haya podido ocasionar. Su determinación dependerá discretionalmente del Juez.

### La medida cautelar en el marco del proceso monitorio

Aunque parece evidente que el legislador no pensó al crear el actual régimen de medidas cautelares en el procedimiento monitorio, no parece que haya razones legales de peso para excluir las medidas cautelares del ámbito de dicho proceso, dado que la simplicidad y sumariedad buscadas por el legislador al regular el mencionado proceso no se verían puestas en entredicho con la adopción de medidas cautelares.

Los argumentos más comúnmente esgrimidos de cara a entender que no cabría solicitar medidas cautelares en dicho procedimiento consisten en

## INTERIM MEASURES IN CIVIL PROCEEDINGS AS A MEAN TO ENSURE THE SATISFACTORY RESOLUTION OF A CLAIM FOR PAYMENT

Jordi Rivera

### Introduction

*Interim measures are such measures issued by the legislator in order for the prevailing party in the court proceedings not to have its right evaded, this mechanisms thus faithfully reflecting the right to effective remedy set out in article 24 of the Spanish Constitution of 1978 and being a useful tool whenever possible and advisable by the circumstances of the proceedings.*

### Basic characteristics of interim measures

*We must highlight interim measures, for their suitability and usefulness in different proceedings, as a tool to ensure the execution of a subsequent judgment, that is, their efficacy. A clear example would be the request of the provisional attachment of assets owned by the defendant in a claim for payment procedure.*

*In the present context, in which we have suffered a clear increase of delay in payments in certain scopes, it is not always enough to have the documentation supporting our right to collection of a certain debt,*

**“...will be granted not because the applicant may hold an undeniable right on the subject matter of the proceeding, but because the applicant may seem to circumstantially have its petitions admitted...”**

*particularly when we know that the financial situation of the individual or legal person subject to such claim is not healthy and that we may obtain a favourable resolution but of impossible execution because the debtor has become insolvent in the course of the proceedings.*

*In such cases and although the request of interim measures may imply the corresponding opening of a separate file in which the adoption of such measures will be dealt with, with the consequent*

*risk that the Judge may not admit them, we consider that it is worth the risk, provided that we fulfil the requirements in the Civil Procedural Act, article 728, i.e., the appearance of legal standing, the threat for procedural delay and the requirement to provide guarantee.*

*Regarding the first requirement, that is, the appearance of legal standing, and taking a proceeding in which we claim an amount derived from a commercial relation held with the debtor as an example, delivery of such documents circumstantially certifying that such relation has existed and that the debt has arisen from such relation, such as invoices or delivery notes, will be more than enough. It has to be clear for us that the measure will be granted not because the applicant may hold an undeniable right on the subject matter of the proceeding, but because the applicant may seem to circumstantially have its petitions admitted in the main proceedings.*

*The second requirement is the threat of procedural delay, i.e., the risk suffered by the applicant of the interim measure to finally obtain a favourable judgment, but which may not be executed due to the unexpected insolvency of the debtor.*

*Regarding the assurance to be given by the applicant, it is a guarantee for the defendant in the event a rejecting judgment is issued to pay the damages that the adoption of the measure may have caused. Its determination will discretionally depend on the Judge.*

### Interim measures in the small claims procedure

*Although it seems to be evident that the legislator did not think on small claims procedure when creating the current interim measures regime, no significant legal reasons may exist to exclude the interim measures from the scope of such procedures, given that the simplicity and immediacy aimed by the legislator when regulating the aforementioned procedures would not be questioned with the adoption of interim measures.*

*The most commonly arguments put forward to understand that interim measures could not be requested in such procedure consist of asserting, firstly that in articles 721 and 726 of the LEC, the adoption of interim measures is conditional on making the right to effective remedy possible*



manifestar, en primer lugar que en los artículos 721 y 726 de la LEC se condiciona la adopción de cualquier medida cautelar a hacer posible la efectividad de la tutela que se contenga en una sentencia estimatoria, cuando en el proceso monitorio no existe sentencia alguna, en segundo lugar que la brevedad implícita en el proceso monitorio debilita o directamente hace no apreciable el peligro en la mora procesal y en tercer lugar que resultaría difícil mantener la contradicción exigida por el artículo 733 de la LEC antes de la adopción de la medida cautelar.

Por otra parte, contamos con una serie de argumentos que sí posibilitarían su adopción, como por ejemplo el tiempo que puede durar el procedimiento monitorio entendido como tiempo de peligro en la mora procesal, tiempo que resulta más que suficiente como para frustrar la tutela solicitada por el demandante o el hecho de que el escrito de petición inicial de proceso monitorio pueda considerarse como de naturaleza semejante a un demanda de juicio ordinario o verbal, puesto que tal petición, en caso de silencio del deudor, puede tener los mismos efectos que la demanda ya que da inicio a un proceso que acaba con una resolución judicial con efecto de cosa juzgada, como sucedería en un proceso ordinario o verbal, y cuya efectividad debe poder ser garantizada con una medida cautelar específica.

Lo que la naturaleza de las medidas cautelares requiere es que las mismas sean accesorias al proceso principal, encontrándose dichas medidas reguladas en un libro independiente en la LEC que hace referencia a medidas concretas de ejecución, y por ello no existe razón alguna para pensar que solo son aplicables a los procesos declarativos tipo. En la medida en que el proceso monitorio, al oponerse el deudor a la reclamación efectuada, se transforma en proceso ordinario o verbal, cabe entender que la solicitud inicial de proceso monitorio puede llegar a equipararse a una demanda, sobre todo en aquellos casos en los que, oposición mediante, el proceso se tramita como un juicio verbal, convocando directamente el tribunal al acto del juicio, con lo que la solicitud inicial del monitorio se convierte en el escrito rector de las peticiones de la parte demandante y la medida cautelar solicitada en accesoria a dicho escrito rector.

**“...la simplicidad y sumariadad buscadas por el legislador al regular el mencionado proceso no se verían puestas en entredicho con la adopción de medidas cautelares.”**

El proceso monitorio no parte de un título ejecutivo sino que tiende a crearlo, puesto que surge con la no oposición del demandado, por lo que estamos ante un proceso que no posee privilegio alguno respecto a los juicios declarativos en la

primera fase de su desarrollo, que es meramente admonitiva y no ejecutiva, lo que se ha representado con la típica frase “paga o da razones”, debiendo resaltarse también la similitudes existentes entre el proceso monitorio y el cambiario, proceso este último en el que sí se prevé expresamente una concreta medida cautelar, el embargo preventivo contemplado en el artículo 821 de la LEC.

### Conclusión

Por cuanto antecede, tratándose la medida cautelar de un mecanismo claramente útil para asegurar el objeto del pleito, puede concluirse que no hay impedimento para que puedan solicitarse medidas cautelares en el marco del proceso monitorio, dado que la ley no lo prohíbe ni existe incompatibilidad alguna entre ambos mecanismos, siendo difícil entender el por qué el actor debería renunciar a las medidas cautelares como herramienta apta para conseguir la tutela judicial efectiva al optar por el proceso monitorio y no por otro, precisamente cuando el proceso monitorio se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico como medida especializada para la protección de un crédito dinerario vencido, líquido y exigible.

*in a positive judgment, when no judgment is issued in the small claims procedure; secondly that brevity implicit in the small claims procedure weakens or just does not allow to consider the danger of procedural delay; and thirdly, that it would be difficult to maintain the contradiction required by article 733 of the LEC before the adoption of the interim measure.*

*On the other hand, we have a series of arguments that would allow their adoption, such as the time that the small claims procedure may last, considering such time as time of risk of procedural delay, which is more than enough to frustrate the protection sought by the plaintiff. Secondly, the fact that the initial petition of the small claims procedure may be considered as of a nature similar to ordinary or oral proceedings, since such petition, in the event of the debtor's silence, may have the same effects that the complaint because it triggers a proceeding that will end with a court decision as res judicata as in ordinary or oral proceedings and whose effectiveness must be guaranteed with a specific interim measure.*

*What the nature of interim measures requires is that they are ancillary to the main proceedings, such measures being regulated in an independent book in the LEC which makes reference to specific execution measures, so that there is no reason to think that they are only applicable to declaratory actions. To the extent that the small claims procedure, when the debtor opposes the claim made, becomes an ordinary or oral proceeding, we can consider that the initial request of small claims procedure may be equalled to a complaint, particularly in such cases where, after the debtor's opposition, the proceeding is administered as an oral trial, the court directly summoning to the trial. Consequently, the initial request of the small claims procedure becomes the writ governing the plaintiff's petitions and the interim measure requested the ancillary tool of such governing writ.*

**“...the simplicity and immediacy aimed by the legislator when regulating the aforementioned procedures would not be questioned with the adoption of interim measures.”**

*The small claims procedure does not arise from a writ of execution, but it tends to create it, since it arises from the non-opposition of the defendant, so that we are dealing with a proceeding that*

*has no privilege with respect to declaratory actions at the first stage of their development -merely admonitory and not executive-, which has been represented with the typical sentence “pay or account for”. Furthermore, we must remark the similarities between small claims procedures and collection proceedings for negotiable instruments, in which a specific interim measure is expressly provided, the provisional attachment set out in article 821 of the LEC.*

### Conclusion

*By virtue of the foregoing, the interim measures being a clearly useful mechanism to ensure the purpose of the proceeding, it can be concluded that there is no obstacle to request interim measures within small claims procedures given that the law does not prohibit it and there is no incompatibility between both mechanisms. In this regard, it would be difficult to understand why the plaintiff should waive the interim measures as an appropriate tool to obtain effective remedy when opting for the small claims procedure and not any other, precisely when the small claims procedure was introduced into our legal system as a specific measure for the protection of a past-due and payable monetary credit.*

COLABORADORES DE ESTE NEWSLETTER / NEWSLETTER CONTRIBUTORS

Jordi Rivera

## BARTOLOME & BRIONES

**Barcelona**  
Balmes 243, 7º · 08006 Barcelona  
Tel. (+34) 93 292 20 20

**Madrid**  
Jorge Juan 30, 4º · 28001 Madrid  
Tel. (+34) 91 577 47 47

**LatinAmerica Rep Office**  
The Four Seasons Office Tower  
1441 Brickell Avenue · Suite 1400  
Miami FL33131.  
Tel. (+1) 305 778 6965

Legal Newsletter se publica para clientes y amigos de la firma. Los artículos publicados no constituyen asesoramiento legal. Si tiene comentarios o preguntas relacionadas con el contenido de la presente Newsletter, le agradeceremos contacte con nosotros por e-mail: newsletter@bartolomebriones.com. Para más información y artículos, por favor consulte nuestra página web: www.bartolomebriones.com

*The Legal Newsletter is published for clients and friends of the firm. The published articles do not constitute a legal opinion. If you have any comments or questions regarding the content of this Newsletter, we would appreciate contact us by e-mail: newsletter@bartolomebriones.com. For more information and articles, please see our website: www.bartolomebriones.com*

© 2015 Bartolome & Briones, SLP. Derechos Reservados